

**Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos**

Distr. general
9 de diciembre de 2015
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos**Comunicación núm. 2366/2014****Dictamen aprobado por el Comité en su 115º período de sesiones
(19 de octubre a 6 de noviembre de 2015)**

<i>Presentada por:</i>	X
<i>Presunta víctima:</i>	X
<i>Estado parte:</i>	Canadá
<i>Fecha de la comunicación:</i>	19 de marzo de 2014 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo a los artículos 92 y 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 24 de marzo de 2014 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	5 de noviembre de 2015
<i>Asunto:</i>	Expulsión del autor a su país de origen (Bangladesh)
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Admisibilidad: manifiestamente infundada; admisibilidad: agotamiento de los recursos internos; admisibilidad <i>ratione materiae</i>
<i>Cuestiones de fondo:</i>	No devolución; condición de refugiado; tortura; detención arbitraria; libertad de opinión y de expresión; discriminación
<i>Artículos del Pacto:</i>	6, párr. 1; 7; 9, párr. 1; 19, párrs. 1 y 2; y 26
<i>Artículos del Protocolo Facultativo:</i>	2; 3; 5, párr. 2 b)



Anexo

Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (115º período de sesiones)

respecto de la

Comunicación núm. 2366/2014*

Presentada por: X
Presunta víctima: X
Estado parte: Canadá
Fecha de la comunicación: 19 de marzo de 2014 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 5 de noviembre de 2015,

Habiendo concluido el examen de la comunicación núm. 2366/2014, presentada al Comité por X en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo

1.1 El autor de la comunicación es X, nacional de Bangladesh nacido en 1969 y que actualmente reside en el Canadá. Es objeto de un procedimiento de expulsión después de que se desestimara su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en el Canadá. Afirma que su devolución a Bangladesh supondría una violación de los derechos que le amparan en virtud de los artículos 6, párrafo 1; 7; 9, párrafo 1; 19, párrafos 1 y 2; y 26 del Pacto. El primer Protocolo Facultativo del Pacto entró en vigor para el Canadá el 19 de mayo de 1976. El autor está representado por el abogado Joseph W. Allen.

1.2 El 19 de marzo de 2014, con arreglo a los artículos 92 y 97 de su reglamento, el Comité, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, pidió al Estado parte que no devolviera al autor a Bangladesh mientras el Comité estuviera examinando la comunicación. El 1 de septiembre de 2015 el Comité denegó la solicitud del Estado parte de levantar las medidas provisionales. El autor permanece en el Canadá.

* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili y Margo Waterval.

Los hechos expuestos por el autor

2.1 El autor comenzó a trabajar como periodista en Bangladesh en 1997. Escribió artículos en los que denunciaba la extorsión y la corrupción en el país, lo que le convirtió en objetivo del partido político gobernante (la Liga Awami) y grupos vinculados a este. Tras la publicación de un artículo que escribió en julio de 2011 sobre la participación de un dirigente local de la Liga Awami en el tráfico de drogas, el autor empezó a recibir amenazas de J., líder de una banda de “facinerosos” en el barrio marginal de Agargaon. Los medios de comunicación informaron de esas amenazas. El autor denunció las amenazas a la policía, sin resultado alguno¹.

2.2 En su comunicación el autor incluye los hechos expuestos en el formulario de información personal que presentó a la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá de la División de Protección de los Refugiados. Según el formulario, el autor comenzó su carrera en el periodismo trabajando como coordinador adjunto para el Foro de Periodistas de Derechos Humanos de Bangladesh hasta enero de 1999. Posteriormente, trabajó como reportero de plantilla en la sección de noticias policiales del diario *The Daily Bhorer Kagoj* hasta enero de 2004. Ese mismo mes, comenzó a trabajar como reportero de plantilla en la sección de noticias policiales de *The Daily Samakal*. Entre enero de 2008 y septiembre de 2011, trabajó como reportero principal en la sección de noticias policiales de *The Daily Kaler Kantho*. Desde enero de 2007 es miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación de Bangladesh. En el formulario de información personal, el autor también declara que es simpatizante del Partido Nacionalista de Bangladesh, pero que nunca se afilió debido a restricciones profesionales.

2.3 En el formulario de información personal se afirma que el autor escribió varios reportajes de investigación relativos a diferentes delitos, entre ellos el tráfico de drogas, y que algunos fueron publicados en periódicos. En ocasiones fue objeto de “intimidaciones verbales” debido a su labor de investigación, y algunas veces se vio obligado a desistir de realizar algún trabajo debido a las amenazas. Asimismo, en el formulario se afirma que desde que la Liga Awami llegó al poder en enero de 2009 las condiciones de seguridad en Bangladesh se han deteriorado debido a la actividad delictiva de los miembros de la Liga Awami, en colusión con la policía, y al incremento de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. El 27 de junio de 2010, durante una huelga general convocada por el Partido Nacionalista de Bangladesh para reclamar un suministro suficiente de agua, gas y electricidad, algunos miembros de la Liga Awami, con el respaldo de la policía, agredieron a activistas del Partido Nacionalista de Bangladesh en la calle. Los miembros de la Liga Awami golpearon a varios dirigentes del Partido Nacionalista, uno de los cuales fue detenido por la policía. Esta también irrumpió en el domicilio de otro dirigente del Partido Nacionalista, vandalizó su casa, y golpeó a su esposa e hijos allí presentes. En el formulario se indica además que se encomendó al autor y a uno de sus colegas que investigasen y cubrieran el suceso, y que se centrasen en determinar si la policía había cometido un delito. Así pues, el 29 de junio de 2010, el autor y su colega fueron al lugar de los hechos para entrevistar a los familiares del dirigente del Partido Nacionalista cuya casa había sido vandalizada. Sin embargo, agentes no uniformados de servicio les impidieron realizar la investigación y los amenazaron con detenerlos por “obstruir el desempeño de las funciones policiales” si no se marchaban inmediatamente. Terminaron por abandonar la investigación.

2.4 En el formulario de información personal también se afirma que, en julio de 2011, se encargó al autor que realizase un reportaje de investigación sobre el tráfico de drogas en el barrio marginal de Agargaon. Para reunir información, visitó la zona en varias ocasiones y conversó con los residentes. Descubrió que la venta de drogas en

¹ No se proporcionan más detalles.

esa zona estaba controlada por el dirigente local de la Liga Awami N. J. y su hijo, quienes tenían vínculos con una conocida banda de facinerosos liderada por J. A raíz del reportaje que había publicado el 2 de julio de 2011, el autor recibió una llamada telefónica de J. el 26 de julio de 2011, en la que lo amenazó de muerte. Posteriormente, tras consultar con su editor y los directivos de la Asociación de Periodistas de Investigación de Bangladesh, el autor denunció las amenazas en la comisaría modelo de Mirpur el 27 de julio de 2011. Por su parte, el Presidente y el Secretario General de la Asociación emitieron un comunicado de prensa en el que condenaron la amenaza y pidieron que la policía adoptase medidas judiciales². Sin embargo, la policía no lo hizo y el autor recibió otra amenaza telefónica de J, que dijo que mataría al autor si se publicaban otros artículos de prensa sobre “sus actividades”. Tras esta amenaza, el autor decidió mostrar discreción y no escribir nada más acerca de “ellos” por el momento.

2.5 Según el formulario de información personal, el autor escribió un artículo sobre los actos generalizados de extorsión cometidos por agentes de la policía. Tras la publicación del artículo en *The Daily Kaler Kantho* el 12 de agosto de 2011, el autor recibió una llamada telefónica del oficial encargado de la comisaría de policía de Paltan, quien al parecer lo amenazó con darle una buena lección por haber acusado de corrupción a la policía. El 20 de septiembre de 2011, el autor viajó de Bangladesh a los Estados Unidos para asistir a una conferencia. Posteriormente fue al Canadá, a donde llegó el 2 de octubre de 2011. Después, su familia en Bangladesh se puso en contacto con él para comunicarle que un grupo de facinerosos de la Liga Awami había saqueado la vivienda familiar en Shawrapara y había amenazado con matar al autor si lo encontraban. En consecuencia, la esposa del autor contrató a un abogado en Bangladesh. El abogado descubrió que la policía quería interrogar y, posiblemente, enjuiciar al autor por el artículo que había escrito sobre los actos de extorsión cometidos por agentes de la policía. El Presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación de Bangladesh aconsejó al autor que no regresara a Bangladesh hasta que no corriera peligro. El 14 de octubre de 2011, la policía se presentó en el domicilio del autor en Shawrapara y lo registró en su busca sin disponer de una orden. El abogado contratado por la esposa del autor supo por la policía que se buscaba al autor en relación con los artículos que había escrito sobre la extorsión cometida por agentes de la policía. El abogado no podía garantizar al autor protección jurídica alguna. En el formulario se indica que, debido a esta situación, el autor presentó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en el Canadá el 19 de octubre de 2011.

2.6 Respecto al agotamiento de los recursos internos, el autor afirma que la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá de la División de Protección de los Refugiados desestimó su solicitud de asilo el 17 de septiembre de 2013 y que su solicitud de revisión judicial de esa decisión fue denegada el 31 de enero de 2014. Además, el autor declara que el 12 de marzo de 2014, la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá desestimó su solicitud de suspensión administrativa de la expulsión. El autor afirma que no reúne las condiciones necesarias para interponer un recurso ante la Junta de Inmigración y Refugiados de la División de Protección de los Refugiados.

² El autor aporta una carta de fecha 27 de febrero de 2014 del Secretario General de la Asociación de Periodistas de Investigación de Bangladesh, en la que se hace constar que el autor había sido reportero principal de la sección de noticias policiales de *The Daily Kaler Kantho* y también miembro de esa Asociación de Periodistas. En la carta también se afirma que el autor solicitó asilo en el Canadá porque era “un periodista sumamente honrado que no hacía concesiones en ninguna situación” y debido a la inseguridad imperante en Bangladesh. En la carta se señala asimismo que el regreso del autor a Bangladesh podría exponerlo a situaciones difíciles, incluidas amenazas contra su vida o torturas por las fuerzas de seguridad, activistas de grupos políticos o delincuentes. En su carta el Secretario General de la Asociación insta al Gobierno del Canadá a velar por la seguridad del autor, puesto que podría ser asesinado o secuestrado si regresaba a Bangladesh.

Alega además que, aunque presentó una solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno el 14 de marzo de 2014, no tiene derecho a acogerse a ese procedimiento ni a que le concedan la residencia permanente por motivos humanitarios y de compasión hasta que hayan transcurrido 12 meses desde la fecha en que se hizo pública la decisión sobre su solicitud de asilo³.

La denuncia

3.1 El autor sostiene que el Canadá vulneraría los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 6, párrafo 1; 7; 9, párrafo 1; 19, párrafos 1 y 2; y 26 del Pacto si lo devolviese por la fuerza a Bangladesh, donde, según afirma, teme ser personalmente atacado y perseguido por las autoridades, que lo consideran una amenaza a causa de su labor periodística de investigación en la que denuncia las extorsiones cometidas por la policía⁴. El autor sostiene que su trabajo como periodista ya ha ocasionado que “unos facinerosos armados” vinculados a la Liga Awami lo amenazaran de muerte; afirma además que la policía y los facinerosos “siguen tras” él. Alega que, como muestran claramente los pasados incidentes, las víctimas no pueden confiar en recibir ninguna ayuda de las autoridades gubernamentales en Bangladesh, ya que ellas mismas son responsables de cometer actos de violencia.

3.2 El autor aduce que las condiciones en Bangladesh se están volviendo más peligrosas para los periodistas y los simpatizantes del Partido Nacionalista de Bangladesh como él. Cita numerosos informes y artículos para respaldar su afirmación de que desde las elecciones del 5 de enero de 2014 los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación se hallan expuestos a un mayor peligro de persecución y con frecuencia son amenazados y encarcelados⁵. Los informes y los artículos citados se refieren, entre otras cosas, a los siguientes incidentes acontecidos entre 2012 y 2014: una redada policial en una imprenta; el control por el Gobierno de la mayoría de los medios de comunicación (especialmente los electrónicos); agresiones físicas a periodistas que denunciaron la violencia política; la detención del redactor jefe interino del diario *Amar Desh*; la detención y privación de libertad de

³ El autor facilita una copia de su primera solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno, desestimada el 17 de marzo de 2014. A ella se adjunta una declaración jurada sin firmar, de fecha 5 de marzo de 2014 de A., un reportero principal de *The Daily Kaler Kantho*, en la que confirma la ocupación y el cargo del autor en el diario y que el autor había recibido amenazas de muerte por denunciar la “poderosa fuerza terrorista” del Gobierno. A. añade que, después de que el autor abandonara el país, A. y su familia también recibieron varias amenazas de muerte por teléfono y otras amenazas de miembros del grupo terrorista del partido gobernante actual y la fuerza de policía. A. declara que él y su familia están intentando abandonar Bangladesh y que el autor no debería ser devuelto al país.

⁴ El autor facilita una copia de un artículo titulado “Tráfico de drogas a plena luz del día”, que afirma haber escrito para *The Daily Kaler Kontho* el 2 de julio de 2011. En él se denuncia el tráfico de drogas público en el barrio marginal de Agargaon, controlado por el Partido Nacionalista de Bangladesh, y se nombra expresamente a N. H. [sic] y a su hijo como jefes del barrio.

⁵ El autor menciona las fuentes de información siguientes: Comité para la Protección de los Periodistas “Bangladesh detiene a tres periodistas y allana un medio de comunicación”, 17 de enero de 2014; *New Age Bangladesh*, “Cierran la oficina de Inquilab”, 17 de enero de 2014; *New Age Bangladesh*, “El control de las calles por la policía y la Liga Awami impide la celebración de la protesta del Partido Nacionalista de Bangladesh”, 30 de diciembre de 2013; Human Rights Watch, “Bangladesh: Llamamiento a que se retiren los cargos y se ponga fin al hostigamiento de Odhikar”, 15 de enero de 2014; Comité para la Protección de los Periodistas, “Periodista bengalí asesinado brutalmente a puñaladas”, 18 de junio de 2012; Comité para la Protección de los Periodistas, “Agresión contra periodistas bengalíes que investigaban un caso de extorsión”, 25 de abril de 2013; Comité para la Protección de los Periodistas, “Periodistas heridos durante redada a una redacción en Bangladesh”, 29 de mayo de 2012; Comité para la Protección de los Periodistas, “Periodistas bengalíes reclaman justicia por el asesinato de una pareja”, 27 de febrero de 2012; Human Rights Watch, Informe mundial de 2014: Bangladesh.

defensores de los derechos humanos, periodistas y otros ciudadanos en aplicación de la Ley de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de 2006, que restringe la libertad de palabra y de expresión; cargos presentados contra dos directivos de la organización de derechos humanos Odhikar por haber denunciado el asesinato de 61 personas a manos de fuerzas de seguridad del Gobierno durante una protesta; la vigilancia y el hostigamiento sufrido por personal de Odhikar en todo el territorio de Bangladesh; el asesinato de un periodista que había recibido amenazas de muerte tras denunciar actividades delictivas de tráfico de drogas a nivel local; agresiones a cinco periodistas que cubrían la presunta extorsión por parte de estudiantes universitarios en la capital; un atentado contra la oficina de un medio de comunicación digital en Daca en el que fueron heridos al menos nueve periodistas; la impunidad generalizada en Bangladesh de autores de actos de violencia contra periodistas, y la creciente represión de periodistas y críticos del Gobierno en el período previo a las elecciones de enero de 2014. Por consiguiente, el autor afirma que su vida peligraría si regresaba a Bangladesh.

3.3 El autor señala además que la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá se equivocó al concluir que carecía de credibilidad. Sostiene que facilitó a la Junta cuantiosa documentación que demostraba que había escrito artículos sobre el tráfico de drogas en Bangladesh y presentado una denuncia ante la policía por las amenazas telefónicas que había recibido. El autor alega también que nunca se le brindó realmente la oportunidad de impugnar el fondo de la decisión por la que la Junta denegó su petición, debido a los fallos procesales inherentes a la revisión judicial. Concretamente, el autor afirma que el Tribunal Federal solo admite a trámite el 10% de las solicitudes de revisión judicial tras una decisión desfavorable. Además, el autor alega que el proceso de revisión judicial no entraña un examen del fondo de la cuestión, ya que la credibilidad y la valoración de las pruebas solo se examinan en función del “carácter razonable” y no de la “precisión”.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1 En sus observaciones de fecha 27 de enero de 2015, el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisibile porque el autor no ha agotado los recursos internos, ya que: a) el autor presentó una nueva solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno el 22 de octubre de 2014, que aún está pendiente de resolución; y b) aunque reúne desde el 13 de septiembre de 2014 los requisitos para presentar una solicitud de permiso de residencia permanente en el país por motivos humanitarios y de compasión, no lo ha hecho. El Estado parte afirma que cualquiera de esos dos procedimientos, si prosperan, permitiría al autor permanecer en el Canadá. Además, el procedimiento de solicitud del permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión tendría en cuenta toda posible situación de dificultad a la que el autor pudiera tener que enfrentarse en Bangladesh. El Estado parte observa que, en *Dastgir c. el Canadá* y *Khan c. el Canadá*, el Comité dictaminó que la presentación de una solicitud de permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión constituía un recurso efectivo que debía agotarse a efectos de la admisibilidad⁶. El Estado parte lamenta la posición más reciente del Comité de que las solicitudes del permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión no son recursos que

⁶ El Estado parte cita, entre otras, la comunicación núm. 1578/2007, *Dastgir c. el Canadá*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 30 de octubre de 2008.

deban agotarse a efectos de la admisibilidad⁷. El Estado parte considera que los motivos para autorizar la permanencia del autor de una comunicación en el Canadá deberían ser irrelevantes, siempre y cuando el autor esté protegido contra la devolución al país en el que alega que estaría en peligro. La solicitud del permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión es un procedimiento administrativo imparcial, sujeto a revisión judicial, que comprende una evaluación de los factores de dificultad pertinentes a los que podría enfrentarse una persona si tuviera que solicitar la residencia permanente desde fuera del Canadá. De hecho, las comunicaciones internacionales presentadas por algunos autores a diversos órganos de tratados, incluido el Comité, dejaron de ser pertinentes tras la resolución favorable de la solicitud del permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión formulada por los autores. Recientemente, en dos comunicaciones presentadas al Comité que afectaban al Canadá cesaron las actuaciones por ese motivo (comunicaciones núms. 2138/2012 y 2144/2012).

4.2 El Estado parte considera además que las alegaciones del autor relativas a los artículos 9, párrafo 1; 19, párrafos 1 y 2; y 26 del Pacto son incompatibles con el alcance de esas disposiciones, por lo que son inadmisibles *ratione materiae*. Estos artículos no imponen a los Estados la obligación de abstenerse de expulsar a personas pese a que pudieran estar expuestas, en el Estado receptor, a un riesgo real de vulneración de sus derechos a la libertad o la seguridad personales, su libertad de opinión y de expresión, o su derecho a la igualdad en el Estado receptor⁸. El Estado parte considera además que todo presunto riesgo para la seguridad personal del autor en relación con el artículo 9, párrafo 1, puede considerarse parte de la valoración de la denuncia del autor respecto del artículo 6, párrafo 1. También considera que el autor no ha explicado con claridad de qué manera su expulsión a Bangladesh supondría un incumplimiento de las obligaciones que incumben al Estado parte con arreglo a los artículos 9, párrafo 1, 19 o 26 del Pacto. Supuestamente, en relación con el artículo 9, párrafo 1, sostiene que correría el riesgo de ser víctima de detención o reclusión arbitrarias en Bangladesh. El autor no ha alegado que haya sido objeto de detención o reclusión arbitrarias por el Estado parte. De hecho, en el curso del procedimiento de inmigración, el autor nunca ha sido privado de libertad en el Canadá.

4.3 Además, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisibles por ser manifiestamente infundada debido a tres motivos. En primer lugar, en relación con las conclusiones negativas de las autoridades del Estado parte respecto de la credibilidad, no corresponde al Comité revisar la evaluación de la credibilidad realizada por las autoridades competentes del país. Las alegaciones del autor que examina el Comité se sustentan en los mismos hechos y pruebas que se sometieron a la División de Protección de los Refugiados y al Tribunal Federal, y que fueron presentados al funcionario responsable de la solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno. La desestimación por parte de la División de Protección de los Refugiados de las afirmaciones del autor sobre su temor a ser perseguido obedece a dos motivos: problemas de credibilidad y la valoración por la División de la totalidad de las pruebas presentadas para respaldar la solicitud de protección. La División alegó que, si bien entendía que el autor era un periodista en Bangladesh que podía haber escrito un artículo en el que se denunciaba a miembros de la Liga Awami, y ser coautor de otro

⁷ El Estado parte cita la comunicación núm. 1959/2010, *Warsame c. el Canadá*, dictamen aprobado el 21 de julio de 2011, párr. 7.4; y comunicación núm. 1816/2008, *K. A. L. y A. A. M. L. c. el Canadá*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 26 de marzo de 2012, párr. 6.5 (donde se concluye que, a efectos de la admisibilidad, no era necesario que los autores presentaran una solicitud de revisión judicial de la segunda decisión por la que se les denegaba la solicitud de residencia por motivos humanitarios y de compasión).

⁸ El Estado parte considera, no obstante, que todo presunto riesgo para la seguridad personal conforme a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, del Pacto puede considerarse parte de la evaluación de su denuncia en relación con los artículos 6, párrafo 1, y 7.

artículo en el que se denunciaba la corrupción de la policía, la cuestión fundamental residía en establecer si se actuaba contra él o se le perseguía por su labor periodística en Bangladesh. Pese a que la División de Protección de los Refugiados resolvió que el autor carecía de credibilidad, efectuó un examen completo de los elementos documentales objetivos que este había aportado para justificar su supuesta condición de periodista que había publicado artículos inculpatorios en Bangladesh.

4.4 En particular, la División de Protección de los Refugiados no consideraba creíble que el autor pudiera ser perseguido por la policía de Bangladesh porque, en la comparecencia en la que se le pidió que expusiera los incidentes que motivaban sus temores, no mencionó el incidente del 14 de octubre que figuraba en su formulario de información personal, que la División estimó que era el único que justificaba su afirmación de que temía a la policía⁹. La División determinó que era razonable esperar que el autor hubiese recordado ese incidente concreto relacionado con su temor a la policía; que no lo recordara restaba credibilidad a sus alegaciones. Además, cuando la División le preguntó acerca de su colega A., con quien el autor había escrito un artículo sobre la corrupción policial y con quien el autor afirmaba haber mantenido varias conversaciones desde que llegó al Canadá, una de ellas aproximadamente un mes antes de la comparecencia ante la División, el autor señaló categóricamente que A. seguía trabajando para el mismo periódico y que no había tenido incidente alguno con la policía. Esta discrepancia preocupaba a la División, puesto que no le parecía creíble que A., un compañero periodista que se hallaba en una situación esencialmente equiparable a la del autor en el contexto de las alegaciones de temor justificado a la policía, no hubiera tenido problemas con esta. Cuando se le siguió preguntando sobre los motivos por los que la policía no habría tratado a A. y al autor de idéntica forma, este modificó su declaración y afirmó, primero, que A. ya no trabajaba en la sección de noticias policiales del periódico, tras lo cual volvió a cambiar su testimonio y declaró que la policía había tratado de localizar a A. y que este debía de haber “resuelto su situación” con ellos. Finalmente, el autor afirmó que A. podía haber tenido problemas con la policía de Bangladesh, pero que nunca pensó en preguntarle al respecto. A juicio de la División, no era lógico que el autor no indagara si su colega que permanecía en Bangladesh estaba siendo acosado por la policía. Además, las incoherencias en la declaración del autor y la falta de pruebas fiables que demostrasen que la policía estuviera persiguiendo al autor o a A., quienes habían redactado conjuntamente y publicado un artículo sobre la corrupción policial, corroboraban aún más la conclusión de que las alegaciones del autor de que era perseguido por la policía simplemente no eran creíbles. El Estado parte considera que la carta de A. (de fecha 5 de marzo de 2014 y presentada al Comité) ha de tratarse con idéntica minuciosidad. Resulta difícilmente creíble que la policía no hubiera ido a buscar a A., como lo había hecho en el caso del autor, o que hubiera esperado a que el autor abandonara Bangladesh para hacerlo. El Estado parte afirma que resulta incluso más difícil de creer que el autor solo tenga ahora conocimiento de las amenazas proferidas contra su colega y coautor en relación con el mismo artículo de prensa.

4.5 El Estado parte observa que la División de Protección de los Refugiados llegó a la misma conclusión respecto a la alegación del autor de que era perseguido por miembros del gobierno local de la Liga Awami y por unos facinerosos con ellos asociados, debido una vez más a las importantes omisiones e incoherencias en su declaración oral, o entre su declaración y el formulario de información personal. A juicio de la División, había tres elementos especialmente reveladores. Primero, el autor había prestado testimonio oral acerca de un incidente acaecido en febrero

⁹ El Estado parte observa asimismo que, en el formulario de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, firmado el 23 de noviembre de 2011, el autor declaró que había sido “buscado por la policía”, pero que nunca había “sido detenido” o “privado de libertad” por la policía.

de 2013, en el que miembros de la Liga Awami y un grupo de facinerosos irrumpieron en su busca en casa de sus familiares; sin embargo, este incidente no figura en el formulario de información personal, que el autor había declarado que era completo, veraz, exacto y actualizado el día de la comparecencia. Cuando se le preguntó durante la audiencia acerca de esa discrepancia, el autor respondió que se trataba de una omisión o de un error de su parte. No obstante, la División rechazó esta explicación por considerar que era razonable esperar que el autor recordase el incidente de febrero de 2013 en la documentación que aportó el 26 de junio de 2013 en apoyo de su solicitud o, cuando menos, que hubiese recordado los hechos antes de declarar que su formulario de información personal era completo, veraz, exacto y actualizado el día de la comparecencia. Además, la División consideró que la credibilidad del autor se vio todavía más menoscabada cuando volvió a modificar su declaración en la comparecencia y afirmó que en febrero de 2013 se habían registrado dos “visitas domiciliarias” de miembros de la Liga Awami y de facinerosos, una en el domicilio que compartía con su esposa y sus hijos (en el que, al parecer, siguen residiendo) y otra en el domicilio de sus familiares. Segundo, la División había advertido errores en las fechas y el número de amenazas telefónicas que el autor afirmaba haber recibido. A juicio de la División, era razonable esperar que un periodista de investigación con experiencia recordara con facilidad las fechas y la cronología de los acontecimientos. Aun sin centrarse en las fechas exactas de los hechos, la División puso en duda la credibilidad de un periodista con 14 años de experiencia que no podía recordar si la amenaza de los facinerosos de la Liga Awami se había producido el mismo día en que presentó la denuncia a la policía o el día anterior. Además, pese a que el autor había intentado explicarlo sugiriendo que se había tratado de un “error de imprenta”, la División consideraba muy poco probable que dos periódicos distintos pudieran imprimir la misma errata, especialmente habida cuenta del grado de detalle exigido en los artículos en los que se formulaban denuncias. Tercero, en vista de la falta de credibilidad general de las afirmaciones del autor, junto con las importantes incoherencias entre el formulario de información personal del autor, su declaración y la documentación justificativa que había aportado, la División determinó que muchas de estas pruebas, incluida una carta de la Asociación de Periodistas de Investigación de Bangladesh, eran tendenciosas y no tenían valor probatorio para corroborar las alegaciones del autor de que era perseguido por miembros locales de la Liga Awami y por un grupo de facinerosos. En relación con la solicitud a trámite de la petición de revisión judicial formulada por el autor, la práctica establecida por el Tribunal Federal supedita la autorización a que el solicitante demuestre que “su argumentación es bastante sólida” o que se plantea “una cuestión grave que se debe dirimir”.

4.6 En segundo lugar, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisibles por ser manifiestamente infundada, puesto que el autor no ha cumplido con su obligación de aportar pruebas que justifiquen sus afirmaciones sobre los hechos vividos en Bangladesh, ni ha demostrado que la situación actual del país represente para él personalmente un riesgo de daño irreparable. El Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité en el sentido de que “el riesgo debe ser *personal* y que ha de haber *motivos muy serios* para determinar que existe un riesgo real de daño irreparable¹⁰”. Un “riesgo real” significa que el riesgo debe ser “consecuencia necesaria y previsible de la devolución” y deben aportarse pruebas que sustenten esa conclusión¹¹. El Estado parte considera que el autor no ha satisfecho la obligación que le incumbe de demostrar que su regreso a Bangladesh lo expondría personalmente a un

¹⁰ El Estado parte cita la comunicación núm. 2007/2010, *X c. Dinamarca*, dictamen aprobado el 26 de marzo de 2014, párr. 9.2 (itálicas añadidas por el Estado parte; se han omitido las citas internas).

¹¹ El Estado parte cita, entre otras, la comunicación núm. 692/1996, *A. R. J. c. Australia*, dictamen aprobado el 28 de julio de 1997, párrs. 6.11 a 6.13; y la comunicación núm. 706/1996, *G. T. c. Australia*, dictamen aprobado el 4 de noviembre de 1997, párrs. 8.1 y 8.2.

riesgo previsible de daño irreparable debido al trabajo que realizó como periodista, ya sea que esa presunta amenaza provenga, conforme afirma el autor, de facinerosos vinculados al partido político gobernante, o de la policía de Dacca. En relación con los temores que afirma sentir por ser simpatizante del Partido Nacionalista de Bangladesh, ni en sus denuncias ante las autoridades nacionales ni en su comunicación se ha dado nunca especial relevancia a su afiliación política o su condición de defensor de los derechos humanos; sus reclamaciones se fundan exclusivamente en afirmaciones de que sus denuncias en la prensa y su labor periodística lo exponen a un daño irreparable. A este respecto, aunque había trabajado como periodista desde 1997, afirma haber recibido amenazas solo en 2011 a raíz de un polémico artículo del que era coautor. No denuncia haber sido hostigado ni amenazado constantemente a lo largo de su carrera profesional. Ningún elemento de la documentación que presentó al Comité hace pensar que su situación se distinga de algún modo de la de otros periodistas en Bangladesh.

4.7 El Estado parte afirma además que varios elementos objetivos reducen la credibilidad de las alegaciones del autor de que recibió amenazas en el tercer trimestre de 2011 debido a su trabajo como periodista. Por ejemplo, como señalaron las autoridades de inmigración del Estado parte durante el procedimiento relativo al autor, las discrepancias en los recuerdos del autor son más bien extrañas en un periodista con experiencia. También resulta sospechoso que el otro periodista con el que escribió el artículo de prensa al que se debían las presuntas amenazas nunca hubiera denunciado amenazas similares o visitas de facinerosos o agentes de la policía, hasta que la División de Protección de los Refugiados del Canadá determinó que el relato del autor no era creíble a ese respecto; solo entonces presentó el autor la carta de A. con el propósito de corroborar sus afirmaciones. El Estado parte considera que ello menoscaba gravemente el valor probatorio de este elemento y que ninguno de los documentos presentados por el autor fundamenta de manera fiable sus alegaciones. El Estado parte sostiene que la carta de la Asociación de Periodistas de Investigación de Bangladesh de fecha 27 de febrero de 2014 no contiene detalles concretos sobre los abusos que el autor podría haber sufrido anteriormente y solo se basa en hipótesis en lo que respecta a los riesgos que podría correr el autor si regresara a Bangladesh. No se explica por qué el autor se distingue de los demás periodistas en Bangladesh, de manera que resulte creíble y razonable pensar que estaría personalmente expuesto a los peligros mencionados más de tres años después de la publicación en un periódico de un artículo referente a cuestiones locales.

4.8 El Estado parte considera que un factor adicional que resta credibilidad a las afirmaciones del autor es la ausencia de toda explicación de por qué, en el artículo de prensa presuntamente ofensivo del que fue coautor, así como en las noticias de los medios de comunicación sobre las amenazas que presuntamente recibió, se mencione un periodista de distinto nombre. A falta de una explicación por parte del autor, cabe preguntarse por qué habría publicado en *The Daily Kaler Kantho* con el seudónimo [Y] cuando el nombre que figura en la acreditación de prensa como reportero principal es [X]. También es plausible que los artículos de prensa se refieran a otro periodista, y no al autor. De hecho, si bien el Estado parte no cuestiona que el autor ejerciera el periodismo en Bangladesh, considera que no ha presentado ningún elemento de prueba, como artículos que se le pudieran atribuir inequívocamente, que respalden su afirmación de que su labor suscitó la atención de la policía y de facinerosos.

4.9 Del mismo modo, el Estado parte considera que, excepto una presunta visita de la policía en 2011 después de que el autor hubiera abandonado Bangladesh (que no se ha corroborado con pruebas objetivas, al igual que no existen pruebas reales de que la policía estuviera, de hecho, buscando al autor con la malévola intención que este afirma), no hay indicios de que su familia fuera víctima de ningún tipo de hostigamiento o intimidación continuos, ni siquiera ocasionalmente. El Estado parte

aduce que esto disminuye aún más la credibilidad del relato del autor. Además, suscita serias dudas acerca de que alguien esté esperando el regreso del autor, teniendo en cuenta que han transcurrido casi cuatro años desde las presuntas amenazas en relación con el artículo de prensa en cuestión referente a cuestiones locales, y que no parecen haberse producido nuevos incidentes relacionados con su familia o con el colega periodista coautor del artículo.

4.10 En tercer lugar, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisibles por ser manifiestamente infundada porque, aun cuando los informes tienden a mostrar que la situación de los periodistas en Bangladesh dista en general de ser ideal, el autor no ha justificado la alegación de que su regreso representaría un riesgo personal. De hecho, el Estado parte considera que todas las alegaciones del autor guardan relación en general con el “riesgo para la vida” que, según afirma, sufrirá al volver a su país de origen, y que la comunicación carece de explicaciones concretas sobre los presuntos riesgos para su seguridad o libertad personales (aparte de una breve mención del riesgo de detención arbitraria en algunas de las cartas que ha presentado en su apoyo), las vulneraciones previstas de su libertad de expresión, o los temores de que será objeto de discriminación. El Estado parte recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia del Comité, “la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no es suficiente; el denunciante debe demostrar que se enfrenta a un riesgo previsible, real y personal”¹².

4.11 El Estado parte refuta asimismo la afirmación del autor de que la situación a la que se enfrentaría en Bangladesh se ha vuelto mucho más peligrosa desde enero de 2014. El Estado parte considera que, según gran parte de la documentación facilitada por el propio autor, el aumento de la represión contra los periodistas en Bangladesh tras las elecciones de enero de 2014 podría referirse más estrictamente a la intimidación de que fueron objeto los periodistas que cubrían las protestas poselectorales. Esto no es aplicable al autor, que no se encontraba en Bangladesh durante las elecciones ni informó nunca sobre esos temas. En cualquier caso, el autor no ha demostrado en modo alguno tener una particular relevancia como periodista, ni ha determinado los riesgos que correría personalmente, ni siquiera *prima facie*. Por último, por los motivos descritos, el Estado parte considera asimismo que la comunicación carece de todo fundamento.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte

5. En sus comentarios de fecha 31 de marzo de 2015, el autor afirma que la situación en Bangladesh para los periodistas es extremadamente peligrosa, especialmente para quienes como el autor han criticado abiertamente la actuación de la Liga Awami. Para respaldar su afirmación el autor cita informes recientes de Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y Odhikar, en los que se indica que periodistas y blogueros de Bangladesh fueron detenidos y agredidos en 2014 y 2015¹³. El 11 de junio de 2015, el autor comunicó que su nueva solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno había sido desestimada el 13 de mayo de 2015.

¹² El Estado parte hace referencia a la comunicación del Comité contra la Tortura núm. 520/2012, *W. G. D. c. el Canadá*, decisión adoptada el 26 de noviembre de 2014, párrs. 8.3, 8.4 y 8.7.

¹³ El autor cita Reporteros sin Fronteras, Índice Mundial de Libertad de Prensa 2015; Comité para la Protección de los Periodistas, *Mission Journal: Bangladeshi press reined in as Hasina exerts authority*, 26 de marzo de 2015 (donde se afirma, entre otras cosas, que “Los oponentes de la Liga Awami están en la línea de fuego”); Comité para la Protección de los Periodistas, *Bangladesh: Attacks on the Press in 2013*, 22 de septiembre de 2014; y Odhikar, Informe de seguimiento de la situación de los derechos humanos (1 a 28 de febrero de 2015), 1 de marzo de 2015.

Otras observaciones del Estado parte

6.1 El 12 de agosto de 2015, el Estado parte pidió que se levantara las medidas provisionales. El Estado parte considera además que el autor no se enfrenta a daños irreparables si es expulsado a Bangladesh, una condición necesaria para el mantenimiento de medidas provisionales de conformidad con el artículo 92 del reglamento del Comité. El Estado parte reitera las observaciones expuestas en el párrafo 4.11 acerca de las condiciones existentes en Bangladesh desde enero de 2014. El Estado parte también reitera las observaciones expuestas en el párrafo 4.10 referentes a la afirmación de que la situación general de los derechos humanos en Bangladesh en lo que respecta a los periodistas no es suficiente para determinar que el autor corre un riesgo real y personal de sufrir daños irreparables. En relación con esta cuestión, el Estado parte considera que hay motivos para creer que en Bangladesh, cuya Constitución garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa, existirían los medios necesarios para proteger al autor. El Estado parte cita el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, relativo a Bangladesh, en el que la Ministra de Relaciones Exteriores de Bangladesh demostró ser consciente de la situación y afirmó que se hacía “el seguimiento de todas las denuncias de violencia contra periodistas a través de un proceso de investigación y enjuiciamiento, y algunos casos ya se habían cerrado”¹⁴. El Estado parte señala también que en el informe se indica que Bangladesh apoyaba varias recomendaciones relativas a la seguridad de los periodistas y la promoción y protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa. El Estado parte reitera su observación, que figura en los párrafos 4.6 y 4.7, de que el autor no ha demostrado que tuviera una especial relevancia como periodista que lo distinguiera de muchos otros periodistas de Bangladesh.

6.2 El Estado parte considera asimismo que, según las propias pruebas presentadas por el autor, las amenazas recibidas se limitaban a tres incidentes concretos acaecidos en 2011. No explica por qué correría peligro de resultados de esas amenazas si regresaba a Bangladesh en 2015. Además, el riesgo a que se enfrenta el autor ha sido evaluado concienzudamente por varias autoridades nacionales: la División de Protección de los Refugiados; un funcionario de la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá, que examinó la solicitud del autor de una suspensión administrativa de la expulsión; y un alto funcionario de inmigración (el funcionario encargado de la evaluación previa del riesgo de retorno). El autor no solicitó la revisión judicial de la decisión sobre la nueva solicitud de evaluación previa del riesgo de retorno.

6.3 En general, el Estado parte también considera que las medidas provisionales deben solicitarse siempre con prudencia y reservarse tan solo para casos justificados *prima facie*. El Estado parte subraya que tiene el derecho de controlar la entrada, residencia y expulsión de extranjeros y, en particular, el derecho de mantener la integridad de su sistema de inmigración y protección descartando a los solicitantes que se estime que no necesitan protección. El Estado parte afirma que “siente el mayor respeto por la labor del Comité. Sin embargo, considera que el Comité debería abstenerse de injerirse en la expulsión de personas que no corren peligro a juicio de las autoridades nacionales, en especial en los casos en que sus alegaciones y relatos personales no parecen indicar que puedan estar en peligro de sufrir daños irreparables, habida cuenta de las condiciones actuales de su país. Personas como el autor de la comunicación, cuyas alegaciones de que corría peligro se han evaluado concienzudamente y se ha determinado que no corrían un riesgo real y personal, no deberían ser objeto de [medidas provisionales]”. El hecho de que el autor pueda ser expulsado a un país con un historial problemático en lo que respecta a los derechos

¹⁴ El Estado parte cita el documento A/HRC/24/12 (8 de julio de 2013), párrs. 67, 129.72, 129.77 y 129.101 a 129.104.

humanos no basta para justificar el mantenimiento de medidas provisionales, en vista de los indicios de que no se enfrenta a un riesgo real y personal de sufrir daños irreparables a su regreso.

Otros comentarios del autor

7. En una comunicación de fecha 31 de agosto de 2015, el autor señala que presentó una solicitud de permiso de residencia en el país por motivos humanitarios y de compasión el 29 de julio de 2015. También afirma que esta solicitud “no suspende la expulsión hasta que se acepte la solicitud en primera instancia”, y sostiene que las observaciones del Estado parte indican que tiene intención de expulsar al autor del Canadá antes de que pueda examinarse su solicitud o su comunicación. El autor reitera además su alegación de que correría un riesgo personal si regresara a Bangladesh y cita varios artículos recientes que indican que los periodistas de Bangladesh corren actualmente peligro de ser maltratados por las autoridades¹⁵. Por consiguiente, sostiene que las medidas provisionales siguen siendo necesarias.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

8.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si dicha reclamación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

8.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

8.3 El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que los autores deben hacer uso de todos los recursos internos para cumplir la exigencia del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo, en la medida en que tales recursos parezcan ser efectivos en el asunto en cuestión y estén de hecho a su disposición¹⁶. El Comité toma conocimiento de que el autor tiene pendiente de resolución una solicitud de permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión, y de que el Estado parte considera que este constituye un recurso efectivo. El Comité, al tiempo que señala las

¹⁵ El autor cita *The Northeast Today* (India), “Journalism at risk in Bangladesh”, 4 de mayo de 2015, (“El periodismo corre peligro en Bangladesh, como decía ayer un informe de la organización internacional Article 19. El gran aumento de las atrocidades cometidas contra periodistas en Bangladesh suscita grave preocupación”); la Federación Internacional de los Derechos Humanos, “Bangladesh: Two more journalists arrested; government trying to silence free speech”, 20 de agosto de 2015, (“El periodista Probir Sikdar, propietario del periódico en línea *Uttaradhikar Ekattor News*, fue detenido por la tarde del 16 de agosto de 2015 en su oficina de Daca por presunta difamación de un ministro del Gobierno en Facebook. ... De manera análoga, el 18 de agosto de 2015 Shaukat Mahmud, Presidente del Sindicato Federal de Periodistas de Bangladesh, fue detenido por agentes de policía no uniformados por haber cometido presuntamente un ataque incendiario contra un autobús el 23 de enero de 2015”.); y el Comité para la Protección de los Periodistas, “Journalist arrested in Bangladesh under country’s ICT Act”, 17 de agosto de 2015 (en donde se menciona la detención de Probir Sikdar y se afirma que “Sikdar fue detenido tras la presentación de una denuncia en que se alegaba que había “mancillado la imagen” de un miembro del Gabinete perteneciente a la Liga Awami, el partido gobernante, según informes de prensa. En una publicación en Facebook de este mes, Sikdar dijo haber recibido amenazas y que, si algo le ocurría, debían exigirse responsabilidades a tres personas, a saber, Khandaker Mosharraf Hossain, Ministro de Administración Local, Desarrollo Rural y Cooperativas, un criminal de guerra convicto y un hombre de negocios, según declaraciones de la policía citadas en el periódico independiente *The Daily Star*”).

¹⁶ Véanse *Warsame c. el Canadá*, párr. 7.4; y la comunicación núm. 1003/2001, *P. L. c. Alemania*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 22 de octubre de 2003, párr. 6.5.

observaciones del Estado parte de que la solicitud del permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión podría autorizar al autor a residir permanentemente en el Canadá, y que en dos comunicaciones presentadas recientemente al Comité cesaron las actuaciones tras la resolución favorable de la solicitud del permiso de residencia por motivos humanitarios y de compasión, observa no obstante que la devolución del autor a Bangladesh no se ha suspendido durante el examen de su solicitud, por lo que estima que no se puede considerar que esa solicitud constituya un recurso efectivo en las presentes circunstancias¹⁷. En consecuencia, el Comité considera que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no le impide examinar la presente comunicación.

8.4 El Comité señala el argumento del Estado parte de que las reclamaciones del autor son inadmisibles en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo por carecer de fundamentación suficiente. En relación con las reclamaciones del autor con arreglo a los artículos 6, párrafo 1, y 7 del Pacto, el Comité observa que el autor ha explicado que las razones de su temor a regresar a Bangladesh se basan en que es simpatizante del Partido Nacionalista de Bangladesh y en las presuntas actividades ilícitas y corruptas del Gobierno que desveló como periodista de investigación. El Comité observa que el autor no ha facilitado información ni documentación que indique que fue atacado por ser simpatizante del Partido Nacionalista de Bangladesh. Por consiguiente, el Comité considera que este aspecto de la reclamación del autor es inadmisibile en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo. No obstante, el Comité estima que, a efectos de la admisibilidad, el autor ha proporcionado detalles y pruebas documentales suficientes sobre el riesgo personal que corre de perder la vida o de sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por su trabajo como periodista de investigación en Bangladesh, por lo que considera esta parte de la comunicación admisible¹⁸.

8.5 Con respecto a las afirmaciones del autor en relación con los artículos 9, párrafo 1; 19, párrafos 1 y 2; y 26 del Pacto, el Comité toma conocimiento del argumento del Estado parte de que las obligaciones de no devolución no se aplican a posibles incumplimientos de esas disposiciones, y de que, por consiguiente, estas reclamaciones son inadmisibles *ratione materiae* en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo. El Comité señala además la observación del Estado parte de que el autor no ha explicado claramente de qué manera su devolución a Bangladesh supondría un incumplimiento de las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud de esos artículos. El Comité determina que el autor no ha fundamentado, a efectos de la admisibilidad, sus alegaciones relativas a los artículos 9, párrafo 1; 19, párrafos 1 y 2; y 26. Por consiguiente, el Comité declara esta parte de la comunicación inadmisibile en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.6 El Comité declara la comunicación admisible por cuanto plantea cuestiones relacionadas con los artículos 6, párrafo 1, y 7, y procede a examinar el fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

9.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

9.2 El Comité toma conocimiento de la alegación del autor de que se vería expuesto a recibir malos tratos si fuese expulsado a Bangladesh debido a su trabajo de

¹⁷ Véanse la comunicación núm. 1898/2008, *Naveed Akram Choudhary c. el Canadá*, dictamen aprobado el 28 de octubre de 2013, párr. 8.3; y *Warsame c. el Canadá*, párr. 7.4.

¹⁸ Véase la comunicación núm. 1957/2010, *Lin c. Australia*, dictamen aprobado el 21 de marzo de 2013, párr. 8.6.

periodista de investigación que había escrito artículos denunciando la actividad delictiva del partido gobernante y de la fuerza de policía. Señala asimismo las observaciones del Estado parte de que las autoridades competentes del país no estaban convencidas de que el autor hubiera sido personalmente atacado como periodista, o de que fuera a serlo si regresaba al país. El Comité toma conocimiento asimismo de la observación del Estado parte de que no corresponde al Comité revisar la evaluación de la credibilidad realizada por las autoridades competentes del país.

9.3 El Comité recuerda su observación general núm. 31, en la que se refiere a la obligación de los Estados partes de no extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro modo a una persona de su territorio, cuando hay razones de peso para creer que existe un riesgo real de provocar un daño irreparable, como el contemplado por los artículos 6 y 7 del Pacto¹⁹. El Comité ha señalado asimismo que el riesgo debe ser personal²⁰ y que ha de haber motivos muy serios para determinar que existe un riesgo real de daño irreparable. Así, hay que tener en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, entre ellos la situación general de los derechos humanos en el país de origen del autor²¹. El Comité recuerda que, en general, incumbe a los órganos de los Estados partes examinar los hechos y los elementos probatorios del caso para determinar la existencia de ese riesgo, salvo si se puede demostrar que la apreciación de estos elementos ha sido arbitraria o manifiestamente errónea, o ha constituido una denegación de justicia²².

9.4 Si bien destaca los informes citados por el autor sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra periodistas en Bangladesh, especialmente contra quienes informan de la corrupción u otros asuntos políticamente delicados, el Comité observa que las alegaciones del autor fueron examinadas minuciosamente por las autoridades del Estado parte en el contexto de sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y de evaluación previa del riesgo de retorno. La División de Protección de los Refugiados resolvió que, si bien el autor podía haber ejercido el periodismo de investigación en Bangladesh, no había fundamentado sus alegaciones sobre las presuntas agresiones y amenazas dirigidas personalmente contra él; que no había demostrado que seguiría suscitando el interés de la policía de Bangladesh o de personas que trabajaban para la Liga Awami; que los elementos de prueba que había aportado para fundamentar sus alegaciones no tenían suficiente valor probatorio²³; y que, aunque había presentado documentación que se refería en términos generales a las violaciones de los derechos humanos de que eran objeto los periodistas en Bangladesh, no había aportado ningún documento que indicara que se vería personalmente afectado.

9.5 El Comité observa además que, si bien el autor cuestiona la conclusión de la División de Protección de los Refugiados sobre el riesgo de sufrir daño al que estaría expuesto en Bangladesh, no ha intentado disipar ninguna de las preocupaciones manifestadas por la División de Protección de los Refugiados o por la oficina encargada de la evaluación previa del riesgo de retorno en relación con la credibilidad de la documentación que el autor presentó o de su declaración ante las autoridades nacionales²⁴. A este respecto, el Comité observa que el autor no ha explicado por qué el nombre del autor del artículo publicado en *The Daily Kaler Kontho*, que aporta para

¹⁹ Véase la observación general núm. 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, párr. 12.

²⁰ Véanse, entre otras, *K c. Dinamarca*, párr. 7.3; la comunicación núm. 2272/2013, *P. T. c. Dinamarca*, dictamen aprobado el 1 de abril de 2015, párr. 7.2; y *X c. Dinamarca*, párr. 9.2.

²¹ Véanse *X c. Dinamarca*, párr. 9.2; y la comunicación núm. 1833/2008, *X c. Suecia*, dictamen aprobado el 1 de noviembre de 2011, párr. 5.18.

²² Véanse, entre otras, *K c. Dinamarca*, párr. 7.4.

²³ Véanse los párrs. 4.4 a 4.9 de este documento.

²⁴ Véanse los párrs. 4.4, 4.5, 4.7 y 4.8.

demostrar que corre peligro, no se corresponde con el suyo, ni de qué manera se le reconocería como autor de esos artículos si regresara a Bangladesh. Asimismo, el Comité toma nota de que el autor no se ha pronunciado sobre las observaciones de la División de Protección de los Refugiados ni de la oficina encargada de la evaluación previa del riesgo de retorno en el sentido de que afirmó que el coautor del artículo del *Daily Kaler Kontho*, que continúa en Bangladesh, no ha tenido ningún problema con la policía. Aunque el autor afirma que no tuvo una verdadera oportunidad de impugnar el fondo de la decisión de la División de Protección de los Refugiados ante el Tribunal Federal, no especifica el fundamento de la solicitud a trámite de su petición de revisión judicial, ni se refiere a la observación del Estado parte de que esas solicitudes se conceden cuando “el caso está razonablemente fundado” o se plantea “una cuestión grave que tuviera que ser zanjada”. En consecuencia, el Comité considera que el autor no ha indicado ninguna irregularidad en el proceso de adopción de decisiones ni ningún factor de riesgo que las autoridades del Estado parte no hayan tenido debidamente en cuenta. El Comité considera que aunque el autor no está de acuerdo con las conclusiones sobre los hechos a las que llegaron las autoridades del Estado parte, no ha demostrado que estas fueran arbitrarias o manifiestamente erróneas, o que equivaliesen a una denegación de justicia. En vista de lo anterior, el Comité no puede llegar a la conclusión de que la información que obra en su poder demuestre que el autor estaría expuesto a un riesgo personal y real de recibir un trato contrario a lo dispuesto en los artículos 6, párrafo 1, y 7 del Pacto si se lo expulsara a Bangladesh.

10. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictamina que la expulsión del autor a Bangladesh no vulneraría los derechos que le asisten en virtud de los artículos 6, párrafo 1, o 7 del Pacto.
